



# **Desafiando la Legalidad: Los límites constitucionales de los DNU, la suma del poder público y Derechos humanos en juego. El caso del decreto 70/23.**

## **DATOS:**

**Comisión:** Derecho administrativo y tributario

**Tema:** Decretos de necesidad y Urgencia

**Autor:** Barbieri Vanina Gisela.

**Inscripción profesional:** Colegio de Abogados de La Matanza

**Domicilio:** Virrey Cisneros 4019, San Justo, La Matanza

**Teléfono:** 11-5729-3345

**Dirección de correo electrónico:**

Barbierivaninag@gmail.com

## **RESUMEN:**

---

En el presente se abordan los límites constitucionales de los decretos de necesidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y su impacto en la democracia argentina. Los DNU son medidas excepcionales que el Poder Ejecutivo puede tomar únicamente en situaciones donde no es posible sancionar leyes por la vía ordinaria. La Constitución Nacional establece límites claros: No deben usarse en materias penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, y requieren aprobación legislativa para su validez. El uso abusivo de los DNU puede ocasionar la concentración del poder en el ejecutivo y por consiguiente el debilitamiento del Congreso, lo que pone en riesgo la división de poderes, principio esencial para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La reforma constitucional de 1994 buscó limitar el presidencialismo.

El decreto 70/23 es un claro ejemplo de esta problemática. Emitido al inicio del gobierno actual, abarcó reformas sustanciales en múltiples áreas como trabajo, salud y economía, sin un debate legislativo adecuado. Se cuestiona si estas medidas realmente responden a una emergencia o si buscan evitar la deliberación parlamentaria. La falta de un plazo máximo para que el Congreso se pronuncie sobre los DNU permite que estos sigan vigentes indefinidamente, lo que afecta la seguridad jurídica y los derechos ciudadanos.

En el caso del DNU 70/23, su contenido vulnera derechos fundamentales y tratados internacionales de derechos humanos, en contravención con la Constitución. Del análisis efectuado, se concluye que es urgente una reforma legislativa para limitar el tiempo de vigencia de los DNU y garantizar el debido control parlamentario.

---

## **Desafiando la Legalidad: Los límites constitucionales de los DNU, la suma del poder público y Derechos humanos en juego. El caso del decreto 70/23.**

---

*Barbieri Vanina Gisela*

*Colegio de Abogados De La Matanza*

### **Resumen:**

El propósito de esta ponencia es analizar los límites de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), explorando los principios constitucionales que rigen nuestra nación, en particular el principio de división de poderes y la supremacía constitucional. A través de un análisis crítico, se buscará identificar los posibles conflictos entre los DNU y los principios constitucionales, enfocándose especialmente en cómo estas medidas pueden afectar los derechos fundamentales del pueblo argentino.

### **Capítulo 1: Introducción**

El dictado de decretos de necesidad y urgencia es una facultad reconocida expresamente al presidente de la Nación por la Constitución Nacional. El **artículo 99, inciso 3**, establece: "*Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, el presidente de la Nación podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, en acuerdo general de ministros*". Los DNU tienen límites claros: solo proceden ante situaciones de excepcional gravedad y no pueden afectar normas en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.

La pregunta central es: *¿qué sucede cuando el Poder Ejecutivo excede estos límites?*  
*¿Cuál es el verdadero alcance de "circunstancias excepcionales"?, ¿Cómo impacta*

*esto en la división de poderes y en el control efectivo que debe ejercer el Poder Legislativo?.*

## **Capítulo 1: Supremacía constitucional, el peligro del Hiperpresidencialismo: La defensa a la División de Poderes en Democracia".**

Es imperioso **dividir el poder** con el propósito de controlar su ejercicio y de este modo garantizar los derechos de los ciudadanos, si el PE puede arrogarse facultades propias del poder legislativo,, *¿acaso no estamos frente a un avasallamiento del principio de separación de poderes?"*.

La división de poderes es un principio fundamental en los sistemas democráticos, evitando que el poder se concentre en una sola entidad, permitiendo el control y el equilibrio entre los tres poderes del estado. Es de vital importancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos y un límite claro que evita los abusos por parte del poder.

En la actualidad nos vamos enfrentando a diferentes desafíos, y un claro ejemplo es el tema en análisis *¿Cuáles son los límites a la facultad del poder ejecutivo en materia de DNU?*. La delegación excesiva de facultades del poder legislativo en el poder ejecutivo se denomina Hiperpresidencialismo. *¿Cómo proteger las libertades individuales y evitar el debilitamiento de la democracia?*.

Mantener el equilibrio entre los poderes es vital para mantener el sistema democrático, brindar seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos humanos. Uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la existencia de un poder limitado, y es por medio de la división de poderes que se logra garantizar, evitando que el poder se concentre en un mismo órgano o persona, situación que daría lugar a un abuso autoritario del poder y un daño significativo a las libertades individuales.

La participación activa de la ciudadanía y el debate parlamentario son pilares necesarios en democracia, las leyes y las políticas deben ser debatidas y consensuadas, representando de la mejor manera posible la voluntad popular. En una democracia plena, las leyes se debaten y son sancionadas por el congreso, de la propia constitución surge que **el presidente NO puede legislar**, solo podría hacer uso de los decretos de necesidad y urgencia en verdaderas circunstancias excepcionales.

La reforma constitucional de 1994 tenía como objetivo central **atenuar el presidencialismo** y **fortalecer el control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo**, buscando así **limitar el poder** de este último. Sin embargo, la relación entre ambos poderes se torna compleja cuando el Ejecutivo asume funciones legislativas.

Dicha reforma se centra en cuatro lineamientos básicos: *la supremacía constitucional, la existencia de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, el ejercicio del poder legislativo en manos del congreso y la facultad reglamentaria del poder ejecutivo, con un limite bien marcado.*

Los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser utilizados de manera estrictamente excepcional y con carácter restrictivo. Su uso recurrente resultaría inadmisible, ya que implicaría **relegar al Congreso de la Nación**, atribuyéndose el Poder Ejecutivo facultades que **no le corresponden**, sino que son únicamente de naturaleza extraordinaria. Su uso abusivo y fuera de los parámetros permitidos implica **un acto de suma violencia ante el principio de división de poderes**

No debe el poder ejecutivo arrogarse facultades propias del poder legislativo, y en consecuencia convertir al congreso en un mero espectador pasivo de su accionar.

Siendo la Constitución Nacional la norma suprema en el Estado argentino, esta establece un gobierno **representativo, republicano y federal**, principios que no son meras

palabras en el texto constitucional, sino **mandatos** que deben ser respetados y garantizados en la práctica.

En lugar de ser una herramienta con la que cuenta el poder ejecutivo para dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, existen situaciones donde los DNU son utilizados como un medio para evitar la discusión legislativa, el poder ejecutivo pasaría a tener una suerte de poder absoluto en la toma de decisiones, llevando a una tendencia cada vez mas parecida al hiperpresidencialismo.

**La teoría de la división** de poderes es crucial para el desarrollo constitucional, ya que establece límites al poder con el fin de proteger los derechos individuales. Para lograrlo, es esencial garantizar la armonía entre los tres poderes del Estado, de modo que cada uno actúe dentro de su propia esfera de competencia y funcionen de manera coordinada para mantener el equilibrio institucional.

## **Capítulo 2: Requisitos Constitucionales para el Dictado de los DNU. Conceptos**

### **Necesidad y urgencia.**

“ Los decretos de necesidad y urgencia son normas de **alcance general**, con **rango de ley, que dicta el Ejecutivo** en ejercicio de un apoderamiento constitucional, sobre materias legislativas sin autorización previa del Parlamento; en tal sentido su carácter es **extraordinario**, porque **sólo proceden ante supuestos constitucionalmente tasados**, y **provisorio**, ya que una vez dictados requieren la **“inmediata” aprobación del Congreso**

<sup>1</sup>.La regla general prevista por el artículo **99 inc 3** a partir de la reforma constitucional del año 1994 establece que : “ *El poder ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de*

---

<sup>1</sup> 3 BALBÍN, Carlos Francisco, Curso de Derecho Administrativo, 1º Reimpresión, Bs. As., La Ley, 2008, t. 1, p. 397, 405

*nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo*”, el principio general que debe regir es el de la **división de poderes**.

En definitiva, dice la constitución que para que el presidente puede llegar a cabo el dictado de un decreto de necesidad y urgencia deben darse ciertas condiciones, entre ellas:

- 1) Requiere de una circunstancia **excepcional** que **haga imposible el uso del mecanismo normal de sanción de leyes**.
- 2) Debe estar **fundado en razones de necesidad y urgencia**.
- 3) **No puede versar sobre materia penal, tributaria, electoral y partidos políticos**.
- 4) El decreto **será aprobado por los ministros**, en conjunto con el **jefe de gabinetes**.
- 5) A los **10 días de su emisión**, el jefe de gabinete debe someterlo a la comisión bicameral permanente, y esta **tiene 10 días para analizarlo** y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para que lo trate expresamente.
- 6) Finalmente **el congreso dictara una ley especial**, con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara las cuales dirán si ese decreto **es o no valido**.

En este punto, es menester hacer mención a la **ley 26.122**, del año 2006, por medio de ella se establece la creación de la **comisión bicameral** de seguimiento de los DNU. En su artículo 10, se establece que esta comisión debe **expedirse sobre la validez o invalidez** de los mencionados decretos y posteriormente elevar un dictamen al planetario de cada cámara para su consideración. Durante todo este proceso, el decreto **permanecerá vigente y serán aplicables hasta tanto sean rechazados por mayoría de ambas cámaras o se emita alguna medida judicial que los invalide**.

A partir de este análisis, se concluye que el dictado de decretos de necesidad y urgencia encuentra su sustento principal en la imposibilidad de llevar a cabo el trámite legislativo ordinario dada la necesidad y urgencia de la situación. Sin embargo, surge la pregunta: *¿Es este el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23? ¿O en este caso el poder ejecutivo utilizó el DNU como un instrumento de poder para imponer sus decisiones frente al poder legislativo?* Considero que la situación se asemeja más a la segunda pregunta. Si bien es cierto que estos decretos son frecuentemente utilizados para abordar situaciones de emergencia económica, persiste aun el **interrogante sobre si el DNU en análisis es el medio más idóneo para enfrentar la crisis.**

### **Capítulo 3: El caso del decreto 70/23 y la suma del poder público- La ausencia de limite temporal ley 26.122.**

A pocos días de asumir el actual gobierno, el Poder ejecutivo con una destacable prisa, dictó el decreto de necesidad y urgencia 70/23, una norma integral, que genera enormes modificaciones en todos los sectores sociales, cuestiones que desde esta perspectiva no deberían ser tomadas a la ligera y sin una discusión legislativa que este a la altura de las mismas. Entre las reformas mas relevantes tenemos a **Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Alquileres y modificaciones a los Códigos Civil y Comercial y Aduanero de la Nación.**

Ante este abanico de cuestiones abordadas por el decreto, surge el siguiente interrogante *¿Era el correcto procedimiento para llevar a cabo estas reformas es mediante un DNU ?y ¿por qué no se optó por un **proceso legislativo democrático** en manos del congreso?.¿ No es acaso un intento de suma del poder publico?*



El DNU 70/2023 declara la **emergencia pública** hasta el 31 de diciembre de 2025 en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, y social. En sus considerandos, el DNU 70/2023 sostiene que “*con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica, se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial.*”<sup>2</sup>

Nuestra Constitución Nacional ha contemplado, inicialmente, **tres instancias o instituciones de emergencia**. Ellas son: **a) declaración de guerra; b) el estado de sitio y; c) intervención federal**. Ellas, inicialmente establecidas en los artículos 23, 6 y 67 inc. 18 y 21. De igual forma, y a modo de contraposición, limitó algunas de ellas en el artículo 29: “*El congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas Provinciales ni a los Gobernadores de Provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otórgales sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de Gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetaran a los que la formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria*”.

<sup>3</sup>Luego de la reforma del 94 se admitieron dos tipos de excepción nuevos, **la delegación legislativa y la que autorizan el dictado de los decretos de necesidad** <sup>4</sup>, se estableció que se encuentran excluidas las materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los

---

<sup>2</sup> Dates, Luis E., y Santiago Maqueda. "El poder Ejecutivo de la Nación dicta decreto de necesidad y urgencia para desregular y fomentar la actividad económica.

<sup>3</sup> Manuele, Abel N.; Judurcha, Paula; Borruto, José. "Algunas consideraciones sobre el DNU 70/23." Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, febrero de 2024.

<sup>4</sup> Ylarri, Juan Santiago. "Emergencia económica (a la luz del caso argentino)." Economic Emergency. Universidad de Buenos Aires.

partidos políticos. Ahora bien, *¿El dictado de emergencia económica es atribución del presidente de la nación?*, considero que **no**, ya que el artículo 99 inc. 3° habilita al presidente a reemplazar excepcionalmente al Congreso en su función legislativa, pero **no lo habilita a reemplazarlo en su función declarativa**. De modo que **el presidente no puede declarar la “emergencia pública” (art. 76, CN) por DNU**, de la misma manera que **no puede declarar la necesidad de la reformar constitucional (art. 30, CN) por DNU** - Cada cuestión tiene su propio procedimiento constitucional y no pueden ser desconocidos por que el Presidente no tiene fuerza para maniobrar en el Congreso de la Nación o porque tiene una sensible minoría para negociar.<sup>5</sup>

El ejercicio, sobre todo abusivo de los DNU, deja de lado por completo el **debate legislativo**, y en consecuencia el ejercicio del **voto popular y la participación ciudadana**.

Por medio de este decreto el PE de manera **arbitraria** sanciona leyes, las cuales fueron impuestas a la ciudadanía de un modo poco democrático y acelerado, sin que haya sido estudiado y debatido el fondo de la legislación a aplicar, no existió ningún tipo de justificación al pueblo. A varios meses desde la implementación de este decreto, surge la pregunta: *¿Cuál es la razón por la cual el Congreso ha sido impedido de llevar a cabo el proceso legislativo de sanción de leyes, tal como lo establece la Constitución?. ¿Cuál fue la urgencia que justificó la desregulación de las obras sociales y prepagas, o la imposición de una reforma laboral que vulnera flagrantemente los derechos laborales protegidos por el artículo 14 bis?.* Sostengo firmemente que la mera existencia de una crisis económica no puede justificar, en ningún caso, **un retroceso en la protección de los derechos económicos, sociales y**

---

<sup>5</sup> Luque, Carlos Daniel. "La claridad de la Constitución Nacional y el DNU 70/2023: Los dilemas de la delegación que pide el poder ejecutivo." Simposio DNU70. 2024-01-10.

**culturales.** Por el contrario, tal medida **representa un riesgo significativo que podría exacerbar aún más la crisis tanto social como económica.**

El caso “ *consumidores Argentinos C/ Poder Ejecutivo nacional*” es un claro ejemplo de los límites constitucionales a los que deben ser sometidos los decretos de necesidad y urgencia. A modo de resumen, la asociación promovió una acción de amparo cuestionando la constitucionalidad del DNU 558/02, el cual modifica la ley 20091 de entidades de seguros, argumentando que estas vulneraron derechos fundamentales de los consumidores y varios principios constitucionales como ser el derecho a la propiedad ( Art 17 CN) , el debido proceso ( Art 18 CN) y el principio de división de poderes (Art 109 CN).La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dio lugar al pedido de la actora, declarando la inconstitucionalidad de este, fallo que termina siendo confirmado por la Corte Suprema De Justicia. La corte entendió que independientemente que el uso de los decretos de necesidad y urgencia se encuentren avalados por la constitución nacional en situaciones de Rigurosa excepcionalidad, este **no puede ser utilizado para eludir el proceso legislativo ordinario, ni para ampliar el poder presidencial mas allá de lo estrictamente necesario.** La corte señaló el carácter excepcional de los DNU, solo para situaciones donde el congreso no puede actuar o casos donde la urgencia exija una solución inmediata ( Fallo Verrocchi). Entiende, que la modificación de la ley de seguros a través de este mecanismo **no satisface los requisitos de necesidad y urgencia que prevé la constitución nacional.** Otro factor que determino dicha decisión fue la **falta de justificación por parte del estado sobre la urgencia en el sector asegurador,** lo que lleva a concluir que el mismo es inconstitucional.

El uso de decretos de necesidad y urgencia no puede responder, jamás, conveniencias políticas, es imperioso el control constitucional sobre el poder

ejecutivo, garantizar el principio de división de poderes y evitar el hiperpresidencialismo.

El DNU permanece vigente mientras no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso. El Congreso tiene un plazo de diez días hábiles para comenzar el tratamiento del decreto desde su presentación, pero **no se establece un plazo máximo para que ambas cámaras se pronuncien sobre su aprobación o rechazo**. En caso de inactividad, el decreto continúa vigente, lo que puede dar lugar a una situación en la que el Ejecutivo actúe sin control legislativo efectivo. Cabe preguntarnos *¿Qué pasa con los derechos afectados durante ese tiempo? ¿La inactividad del congreso es una habilitación tacita ‘para el presidente?’*.

El inconveniente relacionado con la Ley 26.122 es que esta no establece un plazo específico para que las cámaras del Congreso se pronuncien tras la elevación del dictamen de la comisión bicameral. Esta falta de temporalidad permite que el proceso legislativo se dilate, lo que a su vez da lugar a una habilitación por omisión para la vigencia y los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Durante este lapso de tiempo incierto, el poder ejecutivo está habilitado a legislar, lo que afecta severamente los derechos de los ciudadanos, vale decir, que un DNU de las características del analizado vulnera significativamente los derechos del pueblo, no solo por su contenido, sino por la ausencia de debate legislativo.

Ni aun derogado el DNU dejaría de afectar a la sociedad, si tenemos en cuenta que el artículo 24 de la ley en estudio, establece que “ en caso de que el mismo sea derogado, no puede afectar los derechos adquiridos durante la vigencia del dnu”. ¿*Entonces como evitamos que la aplicación indebida de este tipo de decretos afecte los*

*derechos adquiridos por el pueblo?*. Por lo pronto, el ejercicio abusivo e indebido de DNU, debe considerarse como una decisión autoritaria, regresiva y antidemocrática,

#### **Capítulo 4: Derechos Afectados y el Incumplimiento de los Tratados Internacionales. Afectación a los Derechos Humanos-**

Desde la creación por parte del PE del decreto 70/23 comenzaron a ponerse en tela de juicio varios derechos constitucionales, como pueden ser los laborales, el acceso a una vivienda, la salud, la igualdad o el derecho a la educación, pareciera **un abrupto retroceso en nuestra democracia** el hecho que hoy en el año 2024 en un país que se caracterizó siempre por la defensa de los derechos básicos, estos sean cuestionados **por vagos argumentos que responden pura y exclusivamente a intereses económicos del poder**, .Se trata simplemente de una vil regresión en materia de derechos humanos e implica un empeoramiento en las condiciones de vida de la sociedad, que deja al pueblo completamente desprotegido. Resulta curioso que la modificación o derogación de tan extensa normativa reúna las condiciones para ser considerada una “circunstancia excepcional”, resulta mas bien un ataque al ejercicio legislativo en manos del congreso.

En el congreso de la nacion, se expresa la voluntad popular, y es el lugar para llevar a cabo este tipo de discusiones y modificaciones legislativas.

El retroceso en materia de derechos humanos evidenciado por el DNU bajo análisis es notable y preocupante, y en consecuencia contraviene los estándares establecidos por el derecho internacional en esta materia, haciendo caso omiso al status constitucional que la reforma del 94 les otorgo. Este uso **injustificado e inconstitucional** distorsiona el ejercicio de los poderes de emergencia reconocidos por la Constitución Nacional. Si no respetamos estos límites, **¿cuál será el freno al poder público?** -. **La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)** sostuvo que *durante las crisis es*

*fundamental profundizar la defensa de las institucionalidades democráticas y la transparencia de las acciones públicas. En ese sentido, señaló que el Estado de derecho implica la división de las funciones de los poderes del Estado y un sistema de controles para el ejercicio de esas funciones<sup>6</sup>.*

No resulta claro, cual es el fundamento de esta reforma, utilizando los decretos de necesidad y urgencia, si bien existen discusiones y falta un consenso claro en lo que respecta a los términos “necesidad y urgencia”, claro está que debe tratarse de situaciones de carácter excepcional, mas no un medio para hacer caso omiso a la existencia del congreso, afectando de este modo la seguridad jurídica, generando incertidumbre y dañando los principios básicos de la democracia .

### **Capítulo 6: Reflexión final.**

En conclusión los decretos de necesidad y urgencia, son normas de alcance general , previstos y reconocidos por la Constitución. Este mecanismo es previsto solo en situaciones de emergencia, debe ser utilizado con **prudencia y respeto a los principios democráticos y de división de poderes.** Su ejercicio debe respetar **los principios democráticos, la división de poderes y los derechos fundamentales del pueblo.** La división de poderes es fundamental para controlar su ejercicio y garantizar los derechos de las personas. El ejercicio de los decretos de necesidad y urgencia debe ser estrictamente controlado para asegurar su constitucionalidad y respetar los límites del poder público.

Considero necesaria una reforma legislativa que limite el tiempo de vigencia de los DNU, establecer un plazo específico para que el congreso de la nación se pronuncie

---

<sup>6</sup> Centro de Estudios Legales y Sociales. "Enero 2024: Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el DNU 70/2023."

sobre los mismos, evitando que se mantengan vigentes por tiempo indeterminado sin que se lleve a cabo el debido control legislativo. Es menester evitar que el poder ejecutivo tenga la facultad de legislar sin el debido control en un término prudencial.

Luego de este análisis, en el que se intentó brevemente tratar las cuestiones fundamentales que rigen constitucionalmente para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, seguimos sosteniendo con firmeza **que el DNU 70/23 es inconstitucional, no solo vulneró derechos fundamentales de la constitución nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que además no cumple con la manda constitucional de los requisitos para su dictado.** Por lo tanto, es imperativo que se respeten **los límites del poder público y se garantice la plena observancia de los principios constitucionales en el ejercicio del poder ejecutivo.**

La legitimación que el voto popular le otorga al presidente de la nación no es una carta habilitante para dejar sin efecto a los demás poderes del estado, siempre el accionar debe estar en concordancia con la supremacía constitucional y el respeto por la división de poderes. Es imperioso evitar la concentración de poder, y que la sanción de leyes sea efectuada por el modo correcto de trámite legislativo, mas no por la excesiva emisión de decretos de necesidad y urgencia, carentes de fundamentos lógicos.

Finalmente, surge la pregunta sobre las consecuencias del uso abusivo de los DNU.

*¿Existen sanciones efectivas para su uso indebido?* Consideramos necesaria una reforma que limite la vigencia de los decretos y que establezca un control legislativo dentro de un plazo prudencial, evitando que el poder ejecutivo legisle sin la debida supervisión parlamentaria.